



Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso...

Sancionan con fuerza de Ley

TELEFONIA CELULAR E INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO

Artículo 1º: Incorpórese el artículo 15º a la Ley N° 27.078, con la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 15. Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciarios de Servicios de TIC.”

Artículo 2º: Incorpórese el siguiente párrafo al artículo 48º de la Ley N° 27.078, con la siguiente redacción:

“Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta.”

Artículo 3º: Incorpórese el artículo 54º bis de la Ley N° 27.078, con la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 54 bis. Declárase servicio público al servicio de telefonía móvil, en todas sus modalidades. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación la prestación básica obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad a toda persona capaz mayor de 18 años que lo solicite. Dicha prestación básica deberá ser parte del contrato entre la compañía prestadora y el usuario y quedará sujeta a las disposiciones reglamentarias.”

Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso para enfrentar la pandemia del Coronavirus (Covid-19) ha generado que las Tecnologías en Información y Comunicación (TICs) ocupen un lugar por demás central tanto en las actividades laborales que se desarrollan de manera domiciliaria como también en las formas de mantener los vínculos sociales entre las personas. En este marco, el servicio de provisión de internet se constituyó como una herramienta esencial y es preciso que tanto el Estado y los usuarios recuperen un marco regulatorio acorde con la trascendencia que el servicio tiene para toda la sociedad, perdido con el DNU N° 267/2015.

En preciso recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 indica que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión."

Al mismo tiempo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 13°, establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección"¹.

Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce a toda persona "el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas"².

¹ https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

² <https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm>

En Argentina, la Encuesta Nacional de Consumos Culturales revela que “en 2013 apenas un 9% de la población se conectaba a internet principalmente a través del celular, mientras que en 2017 más del 70% se conectó todos los días vía smartphone. El crecimiento exponencial de la digitalización de contenidos culturales posibilitada por la expansión de la red de internet, junto con la masividad del uso de celular, permiten decir que, potencialmente, hoy podemos acceder a la cultura en cualquier momento y lugar. La expansión de internet móvil no sólo cambió la forma de acceso, sino que propulsó el crecimiento de las prácticas culturales que pueden desarrollarse en simultáneo con otras actividades cotidianas, como escuchar música y mirar televisión. Prestar atención exclusiva a una práctica o consumo determinado es algo cada vez menos usual”³.

De acuerdo a la Encuesta a Proveedores del Servicio de Acceso a Internet, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el tercer trimestre de 2019, “se registraron 7.512.968 accesos a internet fijos. Esto significó 0,8% de aumento respecto al tercer trimestre de 2018. Por otro lado, los accesos fijos residenciales crecieron 1,2%, alcanzaron los 6.981.738, y los accesos fijos de organizaciones sumaron 531.230, con una caída de 4,1%. En cuanto a los accesos a internet móviles, en el trimestre bajo análisis, se contabilizaron 31.910.438 accesos, lo que implicó un incremento de 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los accesos móviles residenciales tuvieron una variación cercana a cero y alcanzaron los 28.029.775; y los correspondientes a organizaciones sumaron 3.880.663 y acumularon un alza de 16,8%”⁴.

El INDEC, a través del Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares, registra que –en el cuarto trimestre de 2018- “el 63% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 80,3%, a internet. Además, los datos muestran que, en la Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 78 de cada 100 utilizan internet”⁵.

En 2014, este Congreso sancionó la Ley N° 27.078, por la cual se declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad (art. 1°).

En su art. 15°, esta norma reconoció “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciarios de Servicios de TIC”. Sin embargo, mediante el art. 32° del DNU N° 267/2015, el gobierno de Cambiemos derogó este artículo 15°, en conjunto con varios artículos más de esta norma.

³ <https://back.sinca.gob.ar/download.aspx?id=2457>

⁴ https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_12_192DA9793C88.pdf

⁵ https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_19CF6C49F37A.pdf

El segundo párrafo del art. 48° también fue derogado, el cual afirmaba “Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, serán reguladas por ésta”.

El objetivo del presente proyecto es, en primer lugar, recuperar esos artículos con la redacción original que había aprobado este Honorable Congreso, como mecanismo para que en el marco de la pandemia y el consecuente aislamiento obligatorio preventivo dispuesto por el DNU 297/2020, se reestablezcan herramientas de regulación en un servicio que se volvió indispensable para la vida, el trabajo, y los vínculos sociales y afectivos de todas las argentinas y argentinos.

También resulta pertinente destacar que existen otras iniciativas similares presentadas por otros colegas, como el proyecto 4369-D-2017 de la diputada Liliana Mazure o el expediente 2217-D-2019 del diputado Pablo Carro.

Por otra parte, el rol que adquieren las telecomunicaciones en medio del aislamiento, en particular el de servicio de telefonía móvil, hace que sea imperioso poder avanzar en un marco regulatorio donde se establezcan las garantías necesarias de poder acceder a un servicio básico con estándares de calidad e igualdad de trato. Y que al mismo tiempo existan mecanismos de control acordes a la masividad en la utilización del servicio.

Si bien existen numerosos proyectos con estado parlamentario vigente que proponen un marco regulatorio para la telefonía móvil –incluso uno propio–, resulta imprescindible avanzar en la declaración de servicio público para que la Autoridad de Aplicación tenga las herramientas necesarias y poder avanzar en uno acorde a la situación que estamos atravesando, y que cada argentina y argentino merece para estar comunicado adecuadamente.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.